Conflictos, estatalidades y comunalización en el espacio rural de Santiago del Estero: los casos de la Reserva Campesina y un Encierro Comunitario

Andrea Gómez Herrera (
María del Huerto Díaz Habra
(INDES/CONICET/UNSE)

andrea90@gmail.com , mariadelhuertodh@gmail.com

Eje. 2: Ciencias Sociales, ruralidad y Medio ambiente.

La conflictividad por la tierra en Santiago del Estero, una provincia del Noroeste Argentino (NOA) se puede comprender considerando cuatro elementos. Primero, una estructura agraria caracterizada por la polarización de la propiedad de la tierra y la prevalencia situaciones de inseguridad jurídica en la tenencia, que generalmente estas coinciden con explotaciones agropecuarias sin límites precisos (Paz, 2011; 2013). Generalmente, los ocupantes de estas superficies bajo de diferentes formas de tenencia hacen uso compartido de la tierra para el pastoreo de animales y extracción de leña para carbón y elaboración de postes. Segundo, desde la década del sesenta hasta la actualidad los procesos que favorecieron la concentración de tierra y devinieron en el desplazamiento forzoso y violento de campesinos en gran medida están vinculados a la expansión de frontera agropecuaria en la región (Jara y Paz, 2014). No obstante, también está relacionado con el funcionamiento de un mercado oportunista en el que intervienen actores locales, como abogados, escribanos y rentistas que identificaron condiciones propicias para el negociado de tierras ante la inseguridad jurídica en la tenencia y la falta de oposición por parte de los campesinos debido a la ausencia de una conciencia de derechos (Díaz Habra, 2016). Tercero, la emergencia de un contra-movimiento al despojo que se expresa en diferentes modalidades de insubordinación y resistencia desplegadas principalmente por campesinos e indígenas. Cuarto, las intervenciones estatales que signaron la dinámica del mercado de tierras como el devenir de los conflictos (Jara y Paz, 2014).

En este trabajo nos ocupamos del estudio de dos casos: la reserva campesina provincial en el departamento Ojo de Agua, localizado al suroeste de la jurisdicción y un encierro comunitario y ganadero en el departamento Moreno al noreste de Santiago del Estero. Ambos presentan ciertos aspectos comunes que los tornan significativos para analizar de qué modo las prácticas estatales en ámbitos rurales y las experiencias de lucha por la tenencia de la tierra de pobladores inciden en la estructuración de prácticas de comunalización en ámbitos rurales, tales como: a) la población que reside en estas áreas hacen uso común de la tierra y recursos naturales asociados para el desarrollo de sus prácticas económicas desde varias generaciones; b) son *poseedores con ánimo de dueño* pero no adscriben a ningún grupo étnico-indígena; c) tanto la reserva campesina como el encierro comunitario y ganadero surgen a raíz del enfrentamiento entre empresarios y campesinos por la tenencia de la tierra y se desarrollan a partir de los vínculos con agentes que intervienen en el marco de distintos programas y organismos estatales a nivel provincial y nacional.

El objetivo de este trabajo es analizar prácticas de comunalización en estas poblaciones rurales en torno a la conflictividad por la tierra en Santiago del Estero a partir de la experiencia vivida y los vínculos entre agentes estatales y campesinos involucrados. Cabe señalar que realizamos este trabajo a partir de los datos construidos durante el trabajo de campo en curso en el marco de la realización de nuestras tesis de maestría. Desde un abordaje metodológico cualitativo, la recolección y análisis de información incluyó, revisión de informes técnicos, registros de observación y la realización de entrevistas en profundidad a pobladores rurales, extensionistas y funcionarios públicos que intervinieron en la conformación del encierro comunitario y ganadero, como en el diseño y ejecución del plan de reserva campesina provincial.

Las prácticas de comunalización en relación con prácticas estatales ocupan un lugar central en el análisis de los casos, ya que consideramos que la constitución de relaciones comunales, en tanto productos históricos (nunca acabados) están mediadas por los modos de vinculación con agentes que operan en distintos dominios sociales lo que imprime dinamismo, que exige aprehenderlas como

procesos. Brow (1990) emplea el término comunalización para referir a un proceso continuo de construcción del sentido de pertenencia, que toma lugar en varias bases, se nutre del pasado y al mismo tiempo implica inclusión y exclusión, por lo tanto el pasado es central en la configuración de las relaciones comunales, debido a la convicción que tienen los miembros de un grupo sobre un origen común. Por otra parte, referimos a estatalidades para designar “al conjunto de agentes, agencias, prácticas, procesos e instituciones que son referenciados en el ámbito estatal” Cowan Ros (2016: 3). Alternativamente al concepto de políticas públicas aludimos a prácticas estatales, es decir aquellas prácticas que se ejercen desde el ámbito estatal (Cowan Ros, 2016) y desde una perspectiva interpretativista pretendemos comprender de qué modo acontecen las articulaciones entre actores sociales que operan desde agencias estatales y no-estatales, lo que implica rastrear las relaciones de mediación social. Las relaciones de mediación social suponen un sistema de comunicación negociada a partir de cierto consenso en torno a categorías semánticas, significados y principios de comportamiento entre los actores involucrados en la red de relaciones de mediación, aunque siempre hay lugar para la discrepancia y el desencuentro en las interacciones (Nussbaumer y Cowan Ros, 2011). Además pretendemos dar cuenta del dinamismo que imprime el involucramiento de actores sociales diversos movilizados por intereses y visiones de mundo heterogéneas y en disputa, en la planificación e implementación de intervenciones (Asad, 2008; Balbi y Boivin, 2008; Shore, 2010; Franzé Mundanó, 2013; Cowan Ros, 2016).

El Hoyo es un paraje del departamento Moreno que se encuentra ubicado a 168 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Para llegar allí, ya sea desde las rutas provinciales N° 2 y N° 5, se recorren por caminos de tierra aproximadamente entre 49 y 56 kilómetros. En él residen unas sesenta y cinco familias que hacen uso compartido de la tierra para el pastoreo de sus animales y la extracción de madera. Es decir que la ganadería, principalmente la cría de bovinos y caprinos, como la extracción forestal orientada a la producción de carbón son las actividades predominantes, basadas en el aprovechamiento de la tierra y recursos asociados (como agua y monte) y en las que intervienen los miembros de cada familia. A pesar de que los pobladores de El Hoyo habitan allí hace varias décadas, no cuentan con el título de dominio de las tierras que ocupan. En el año 2004, una empresa de origen extra provincial compra un campo que colinda con la tierra en posesión de las familias de este paraje e incluso avanzaron con topadoras sobre el sector sur de la posesión. A raíz de este primer enfrentamiento, los pobladores de El Hoyo también desplegaron una batería de acciones colectivas orientadas a frenar el despojo de sus tierras que incluía la acción directa en el conflicto como también apelar a denuncias y trámites judiciales. Por otra parte, técnicos extensionistas del ex-Programa Social Agropecuario (a partir de aquí, PSA), habían comenzado a intervenir en el paraje con la intención de alentar la producción bovina pero asociada a la promoción de los derechos posesorios sobre la tierra, en otras palabras, al implementar mejoras productivas lograrían afianzar “la posesión”. En efecto, los técnicos proponen la conformación de “encierros ganaderos” o “potreros”, es decir superficies de monte destinadas a la cría de ganado bovino para lograr un mayor control del rodeo y mejorar la cría mediante prácticas de manejo silvo-pastoril. Frente a la amenaza de ser despojados de esas superficies de tierra, muchos pobladores adhieren a la iniciativa de “construir los potreros para hacer posesión” y cerrar el campo comunitario para de este modo defender la tierra. Al mismo tiempo que promovían cambios técnicos-productivos, los extensionistas del PSA intervenían promoviendo el ‘asociativismo’ y “la organización comunitaria” en la gestión de la actividad de cría. Partían del diagnóstico que impulsar la cría de forma mancomunada era una propuesta “viable”, en tanto se asentaba en la práctica de pastoreo en superficies de uso comunitario. Además el agrupamiento de productores constituía un criterio de elegibilidad de los beneficiarios de PSA-PROINDER, por lo tanto las formas de vinculación asociativas constituía un imperativo de organización social de la producción para que los pobladores de El Hoyo accedan a las prestaciones de estos programas. Así surgieron dos grupos de “productores” para la gestión de los encierros y también la formalización de este agrupamiento que derivó en la conformación de la asociación de fomento comunal que aglutinaba a los pobladores del paraje a cargo de la gestión de ambos potreros. Con la constitución de la asociación nacía un sujeto colectivo que operaba como “interlocutor” ante los agentes estatales, un rol que le asignaban tanto los técnicos como los socios. La presentación de proyectos por intermedio de la asociación era la vía para acceder y canalizar recursos que procedían de los programas estatales y que eran mayormente destinados a la producción bovina. Por lo tanto, formalizar su existencia como grupo, conformando

una asociación de fomento era percibida como una ‘necesidad’ para vincularse con agentes estatales y por consiguiente para “gestionar cosas”.

En las Sierras de Ambargasta, los Lotes 8, 9 y El Cajón, están ubicados a 40 kilómetros de la Villa de Ojo de Agua, siendo ésta la ciudad más cercana. En dichos parajes, residen actualmente alrededor de 150 familias que poseen graves dificultades de comunicación debido a la escasa frecuencia de los transportes públicos y la ausencia de servicios telefónicos. Allí existen yacimientos minerales y durante décadas la industria minera ha explotado la zona, principalmente para la extracción del manganeso. Estas tierras han sido habitadas por los campesinos de manera ancestral, incluso por indígenas comechingones. A pesar de que éstos se reconocen como sus habitantes ancestrales, los conflictos por la tierra datan de principios del Siglo XX, cuando un empresario bonaerense de la Sociedad Rural Argentina compra estas tierras, las hipoteca para invertir en campos de la región pampeana. A medida que efectuaban nuevas transacciones de compra y venta, fueron proliferando los conflictos. Hubo quienes decidieron abandonar esos terrenos, mientras que otros, no sólo permanecieron allí, sino que desplegaron distintas acciones de defensa. El punto de inflexión de los conflictos se produjo en el año 2003, cuando un grupo de empresarios externos al territorio alambra los reservorios de agua de uso común limitando el paso y el acceso de los recursos a la población. A partir de este momento los pobladores planificaron y ejecutaron una serie de acciones colectivas de autodefensa y resistencia, pero en el que también intervinieron actores de distintos organismos estatales provinciales y nacionales que brindaban asesoramiento legal-jurídico como: el Registro de Aspirantes a la Regulación de la Tenencia de la Tierra y el Comité de Emergencia, dependencias de la Jefatura de Gabinete. La organización entre vecinos de los parajes se hizo cada vez más frecuente y se institucionalizó como “Organización civil mesa de tierras de Ojo de Agua” y de esta manera los técnicos de terreno impulsaron la iniciativa de conformar un Reserva Campesina en el marco de la Ley de Bosques Nativos 26.331 parano sólo evitar el desmonte y la explotación de los recursos, la protección contra la actividad minerasino también frenar los desalojos de los pobladores. El plan de Reserva Campesina Provincial permitía mantener los vínculos y la organización entre vecinos creando un ordenamiento territorial. Además, ha posibilitado la administración de determinados bienes que son de uso común mediante comodatos firmados ante escribanos. Si bien no existe una figura jurídica en Argentina que avale los derechos comunales, este instrumento tiene como fin regular el ordenamiento de la propiedad de tierras rurales y permitir una protección de los habitantes que la integran (re)valorizando la biodiversidad, la cultura y la agricultura del territorio. A partir de estos estudios de casos pretendemos visibilizar y contribuir al estudio de comunalidades rurales proponiendo un abordaje centrado en el análisis de prácticas sociales. Advertimos que en Santiago del Estero y en el marco de conflictos de larga data, las experiencias como las representaciones del pasado en torno a la lucha por la tierra y el agua de uso comunal de muchos pobladores rurales incidieron en la construcción de un sentido de pertenencia “comunitario”. Además pudimos dar cuenta cómo las gubernamentalidades permean los mundos de vida de la población rural (viceversa) y condicionan los procesos de subjetivación colectiva, ya que las relaciones comunales se re-fundan a partir de las intervenciones de agentes estatales en la promoción de lógicas y formatos asociativos de organización social para gestionar esos recursos comunes.

Palabras claves: bienes comunes-prácticas estatales-comunalidades rurales

Bibliografía

- Abrams, P. (1988): Notes on the difficulty of studying the state. *Journal of Historical Sociology*, 1, 1, 58-89. Recuperado de:
- Asad, T. (2008): ¿Dónde están los márgenes del estado? *Cuadernos de Antropología Social*, 27, 53-62.
- Balbi, F& Boivin, M. (2008): La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. *Cuadernos de Antropología Social*, 27, 7-17.
- Brow, J. (1990): Notes on community, hegemony and uses of the past. *Anthropological Quarterly*, 63, 1-7.
- Cowan Ros, C. (2016): Estatalidades, políticas públicas y movimientos sociales en su configuración interdependiente: una perspectiva analítica. *Contested cities - Working papers series*, 1-52.

- Cowan Ros, C& Nussbaumer, B. (2011): Trayectoria conceptual de la mediación social: expedicionarios, patrones, políticos y profesionales técnicos en la interconexión y prosucción de mundos de significado. En C. Cowan Ros y B, Nussbaumer, *Mediadores sociales. En la producción de prácticas y sentidos de la política pública* (pp. 17-68). Buenos Aires, Argentina: CICCUS.
- Diaz Habra, María del Huerto (2016):“Conflictividad agraria y políticas de tierra en Santiago del Estero, Argentina: los nuevos escenarios políticos entre sujetos de lucha y agentes estatales” realizadas publicado en las actas del congreso por Universidad Nacional de Quilmes en el marco de las XIII Jornadas Nacionales y V Internacionales de investigación y debate. sujetos sociales y territorios agrarios latinoamericanos. siglos XX Y XXI. ISSN 2451-6457
- Franzé Mundanó, A. (2013): Perspectivas abtropológicas y etnográficas de las políticas públicas. *Revista de Antropología social*, 22 , 9-23.
- Jara, C y Paz, R. (2014): Ordenar el territorio para detener el acaparamiento mundial de tierras. La conflictividad de la estructura agraria de Santiago del Estero y el papel del Estado.*Revista Proyección* , 171-195.
- Paz, R. (2011): Agricultura familiar en el agro argentino: una contribución al debate sobre el futuro del campesinado. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 91, 49-70.
- _____ (2013): Explotaciones sin límites definidos y desarrollo rural en Santiago del Estero: Hacia un ordenamiento territorial, *Revista Realidad Económica*, 277, 109-128.
- Shore, C. (2010): La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" de las políticas. *Antípoda*, 10 , 21-49.